

IGLESIA VIVA
Nº 240, octub.-diciembre 2009
pp. 9-30
© Asociación Iglesia Viva
ISSN. 0210-1114

ESTUDIOS

Propuestas para salir de la crisis: una valoración

Pedro José Gómez Serrano. Universidad Complutense. Madrid.

“Nos reunimos en medio de la transición fundamental de la crisis a la recuperación, para dejar atrás una era de irresponsabilidad y adoptar un conjunto de políticas, reglamentos y reformas que se ajusten a las necesidades de la economía global del siglo XXI”¹.

Cumbre de Pittsburg del G-20.

“La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso. A apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las negativas. De este modo, la crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo”².

Benedicto XVI, *Caritas in veritate* nº 21.

1 DECLARACIÓN DE LÍDERES: CUMBRE DE PITTSBURG, Preámbulo nº 1, 25 septiembre 2009.

2 BENEDICTO XVI: *Caritas in veritate*, Carta encíclica, 19 de junio de 2009.

El presente artículo pretende analizar –de un modo muy esquemático– las principales medidas propuestas por los gobiernos y agentes sociales para salir de la crisis internacional, ubicarlas en el marco teórico-ideológico al que corresponden, describir los principales resultados obtenidos hasta el momento de redactar este escrito –octubre de 2009– y valorarlos éticamente desde una sensibilidad cristiana, es decir, que pone en primer término la igualdad esencial de derechos de todas las personas, la situación social de la mayoría de la humanidad y, en particular, de los más pobres³. Debo aclarar, desde el principio, que me voy a referir sólo a las medidas que se están planteando, discutiendo y aplicando efectivamente y no a las que hipotéticamente podrían definirse cuestionando el sistema capitalista en su conjunto. En concreto me centraré en las medidas de lo que llamamos habitualmente “política económica”, no al plano de los comportamientos grupales o personales. Incluso con esta delimitación, el campo de estudio resulta desmesurado para la dimensión normal de un artículo, por lo que sólo me detendré en las grandes tendencias.

1. Paradigmas vigentes de economía política

Un amigo ingeniero suele desprestigiarme benévolutamente señalando –con razón– que los economistas somos expertos en explicar perfectamente las cosas “a toro pasado” e incapaces de prever lo que va a ocurrir con una mínima antelación. Mientras era estudiante recuerdo haber oído en la facultad que cuando tres economistas se reúnen para analizar un asunto suele haber cuatro opiniones distintas (porque siempre hay algún “erudito” que además de la suya, recuerda alguna de los “santos padres”: Smith, Marx o Keynes). Este escepticismo llega a la cumbre en el título de un libro de Stanislaw Andreski: *Las ciencias sociales como forma de brujería* (Taurus, 1973) que ridiculiza la pretensión de rigor y exactitud de muchas disciplinas sociales como la Economía. Lo cierto es que, efectivamente, ante cualquier problema económico serio, los expertos discrepan, si no en los síntomas, sí desde luego en el diagnóstico y, por supuesto, en el tratamiento más recomendable. Los motivos son múltiples (distintos marcos metodológicos, diversidad ideológica, intereses opuestos, variedad de herramientas analíticas disponibles, etcétera), pero el hecho es incuestionable.

Simplificando mucho las cosas –por motivos pedagógicos– podemos señalar que en la actualidad existen cuatro maneras de enfocar los problemas económicos:

³ He realizado dos acercamientos a la crisis: “Los rostros de la crisis”, *Frontera*, n° 50, abril-junio 2009, y “¿Qué revela de nosotros la crisis que estamos padeciendo?” *Sal Terrae* n° 1.136, julio-agosto 2009.

a) El paradigma *neoliberal*, uno de cuyos más destacados exponentes fue el premio Nobel de economía Milton Friedman, parte de la convicción de que el capitalismo es el mejor sistema económico concebible, porque garantiza mejor que cualquier otro tanto la libertad de cada individuo como la eficiencia económica global⁴. Para esta visión, el mercado es un mecanismo que asigna los recursos de modo óptimo y que, a través de la dinámica competitiva, estimula a los propietarios de capital y de trabajo a aprovechar al máximo sus oportunidades, obteniendo así el máximo producto que, a su vez, se distribuye –de un modo justo– retribuyendo a cada cual conforme a su esfuerzo y acierto. Desde esta perspectiva, lo privado siempre es considerado mejor que lo público, el comportamiento individualista más operativo que los procesos de decisión colectiva y el valor de la libertad preferido netamente al de la igualdad. En consecuencia, para los partidarios extremos de este punto de vista, ante la crisis no habría que hacer nada. En el terreno económico el gobierno debe limitarse a hacer cumplir la legalidad y perseguir a quienes han actuado delictivamente. El mercado castigará a quienes gestionaron mal las empresas financieras y a quienes, ingenuamente, confiaron sus fondos a unos gerentes corruptos o incompetentes. Cualquier intervención pública “paliativa” será interpretada como perjudicial para la dinámica económica y su financiación tildada de “confiscatoria”. Tal posición doctrinaria no es defendida hoy en público por casi nadie, dada la magnitud de la crisis económica que atravesamos, pero ha tenido insignes promotores hasta hace poco tiempo.

Ante cualquier problema económico serio, los expertos discrepan en el diagnóstico y en el tratamiento

b) La posición *conservadora* asume la necesidad de que el estado intervenga en la economía “como mal menor” proporcionando bienes públicos que no son interesantes para el sector privado (o que no pueden comercializarse) y protegiendo a los grupos sociales más vulnerables (que no pueden afrontar con sus recursos situaciones difíciles). No obstante, desde esta ubicación ideológica se mantiene la sospecha de que el aumento de lo público pueda ahogar la iniciativa privada (leyes rígidas, exceso de impuestos, captación del ahorro disponible por parte de la administración, etcétera), que alimente un pesado y costoso aparato burocrático o que genere actitudes de pasividad en los grupos sociales que se benefician de los servicios públicos. En palabras de Ronald Reagan: “La gente estaba cansada del derroche que suponen los programas de ayuda social y de quienes se dedicaba a aprovecharse de ellos; enojada ante la constante espiral de impuestos y reglamenta-

4 FRIEDMAN, Milton y Rose: *Libertad de elegir*, Grijalbo, Barcelona 1980.

ciones y harta de burócratas arrogantes y de funcionarios que pensaban que todos los problemas de la Humanidad podían resolverse tirando a espuestas el dinero de los contribuyentes”⁵. Ante la crisis, esta corriente que es políticamente muy influyente, acepta el salvamento del sistema bancario (llegando, en ocasiones, a proponer que el estado se quede con los “activos tóxicos” para sanear así los balances de las entidades financieras), promueve un apoyo directo a las empresas (subvenciones, desgravaciones, reducción de los impuestos, abaratamiento del despido, moderación salarial, etcétera) y subraya la necesidad de practicar una mayor austeridad fiscal para que el déficit público no se dispare y desencadene problemas de inflación y endeudamiento.

c) La visión *socialdemócrata* –quizá la que tiene mayor peso teórico en el debate actual– parte de dos convicciones: que eliminar el mercado y la iniciativa privada tendría unos costes elevadísimos en términos de dinamismo económico y que, al mismo tiempo, el capitalismo genera inevitablemente desigualdad, exclusión y –como consecuencia de la pugna competitiva– una

Hoy hay cuatro maneras de enfocar los problemas económicos: neoliberal, conservadora, socialdemócrata y enfoques alternativos

tendencia intrínseca a la explotación de las personas y del medio ambiente. Igualmente, partiendo de las ideas de Keynes, constata que el mercado no tiende de forma natural al equilibrio y el pleno empleo –ya que las oscilaciones cíclicas se vienen produciendo desde hace más de dos siglos–, por lo que se hace necesario intervenir en el mismo con políticas anticrisis. La protección social amplia, la prestación de servicios públicos universales (no sólo para las capas más vulnerables de la población), la redistribución de la renta y

la regulación macroeconómica, son las señas de identidad de esta postura⁶. En consecuencia, en los momentos en los que se produce un deterioro económico serio, propugnan una enérgica intervención del sector público para mantener la actividad productiva, la extensión de los mecanismos de protección social y un reparto equitativo de la carga del ajuste que tenga en cuenta la capacidad económica de cada segmento social.

d) Lo que podríamos denominar enfoques *alternativos*. Y el plural resulta pertinente porque aquí se ubican corrientes de pensamiento sumamente diversas: las promotoras de la economía social (cooperativismo, comercio justo, banca ética, consumo responsable, etcétera); los partidarios de la preservación de los sistemas de producción de los pueblos indígenas; los promotores del decrecimiento en aras de la sostenibilidad; los empeñados en la

⁵ Fragmento de la autobiografía del expresidente norteamericano Ronald Reagan citado en KRUGMAN, Paul: *Después de Bush*, Crítica, Barcelona, 2008.

⁶ NAVARRO, Vicenç: *Neoliberalismo y Estado del Bienestar*, Ariel, Barcelona, 2000.

reforma de las instituciones internacionales; los impulsores de un nuevo sistema fiscal mundial; los defensores de tecnologías tradicionales; aquellos que desean eliminar el dinero o el uso del interés y promueven la creación de bancos del tiempo o sistemas de trueque; los identificados con la estatización de los principales medios de producción a la vieja usanza soviética o con formas mixtas renovadas, etcétera. Su horizonte último sería la superación del capitalismo, pero no poseen una alternativa económica global al sistema vigente. Puede que todos crean que “otro mundo es posible” pero, desde luego, cada uno de estos grupos lo imagina de un modo distinto⁷. Esta multitud de corrientes críticas con el capitalismo no tienen, por ahora, la fortaleza intelectual y la capacidad política suficientes como para incidir en la agenda de las reformas y políticas realmente debatidas en los niveles económicos nacional y global, aunque algunas de sus intuiciones –por ejemplo, la necesidad de ir instaurando una fiscalidad internacional– van teniendo una creciente cabida en el debate público y académico.

En definitiva, lo que hoy se discute en las instancias de poder político es la reforma y ajuste institucional del sistema vigente para intentar reducir, en la medida de lo posible, la aparición de turbulencias financieras análogas a las que han dado lugar a la primera gran crisis económica del siglo XXI y el tipo de medidas económicas que pueda reactivar el sistema económico cuanto antes. Reformas discutidas entre los que he denominado conservadores y socialdemócratas que, en todo caso, se sitúan dentro del sistema capitalista y que no resultan en modo alguno revolucionarias. A ellas dedicaremos las siguientes páginas.

2. Propuestas para regular mejor el sistema financiero internacional

Lo cierto es que los análisis recientes revelan que, en el sistema financiero, ha fallado todo: la “innovación” ha creado instrumentos opacos que no comprenden ni los profesionales del sector; la prudencia y competencia de los gestores bancarios han brillado por su ausencia; ha faltado seriedad y rigor en los supervisores públicos; la precisión de la normativa vigente –que iba muy por detrás de los fenómenos que pretendía regular– no era suficiente; proliferaron las prácticas contables irregulares; ha habido poca seriedad de empresas auditoras y calificadoras de riesgos; ha faltado el sentido común de los inversores y se han dado demasiadas facilidades para globalizar las conse-

7 DÍAZ SALAZAR, Rafael: *Justicia Global*, Icaria, Barcelona, 2002.

cuencias de malas prácticas financieras, etcétera⁸. Los mismos fenómenos que hace pocos meses eran presentados como ejemplo del éxito económico han revelado sus pies de barro cuando la crisis financiera ha hecho eclosión. Algo que, por otra parte, no es nuevo dado que las burbujas financieras acompañan la historia del capitalismo desde sus orígenes⁹.

Son muchas las propuestas que se discuten actualmente para conseguir un sistema financiero más transparente y seguro, pero no debiéramos olvidar que medidas de mayor control han sido establecidas en periodos de turbulencias análogos (como ocurrió con la normativa bancaria norteamericana posterior al *crack* del 29) y que, después, el paso del tiempo y la búsqueda de mayor flexibilidad y eficiencia de la intermediación financiera (entre ahorradores e inversores), así como la persecución de beneficios extraordinarios, han conducido, una y otra vez, a su relajación. El objetivo que debe perseguir un adecuado sistema financiero está claro: canalizar el ahorro hacia las actividades económicas más rentables (individual y socialmente) garantizando, al mismo tiempo, la máxima seguridad para los proveedores de fondos y el menor coste para quienes los utilizan. Pero, ¿cuáles son, en concreto, las medidas que podrían mejorar, en estos momentos, el funcionamiento del sistema?

En un primer momento, la preocupación de las autoridades económicas se centró en evitar la quiebra de las mayores entidades y, sobre todo, el hundimiento encadenado de las mismas, que habría acontecido inevitablemente sin una intervención decidida de la administración. Resulta difícil realizar una estimación realista de los fondos empleados en estas operaciones de salvamento, pero algunos observadores señalan 11,6 billones de dólares en USA y 3,77 en Europa. En este terreno, la necesidad de intervenir resultaba evidente para la inmensa mayoría de los economistas. Sin embargo no existe ni mucho menos coincidencia en el "modo" concreto de efectuar la intervención, ni en la forma en la que debe actuarse pasada la situación de emergencia. Cada alternativa considerada responde a intereses y planteamientos ideológicos distintos. Como indiqué anteriormente, el enfoque conservador ha llegado a defender que el estado se hiciera cargo de los títulos de mala calidad para sanear al sistema bancario. De modo más moderado ha aceptado la necesidad de inyectar capital público en las entidades más debilitadas e, incluso, una intervención temporal que devolviera cuanto antes los bancos a las manos privadas, aceptando que los accionistas fueran penalizados con unos menores dividendos y la drástica contracción del valor de sus títulos de propiedad.

8 LONDON, Frédéric: *El porqué de las crisis financieras y cómo evitarlas*, CIP-La catarata, Madrid, 2009.

9 GALBRAITH, John Kenneth: *Breve historia de la euforia financiera*, Ariel Barcelona, 1993.

Desde posiciones teóricamente más a la izquierda –que no tienen que haber sido defendidas por partidos necesariamente socialdemócratas– se ha ido más lejos, aceptando la nacionalización parcial o total de ciertos bancos que podrán ser privatizados más adelante. Es el caso de algunas decisiones adoptadas en Alemania por la democristiana Ángela Merkel o, en Gran Bretaña, por el laborista Gordon Brown. No está claro si en muchas de estas operaciones hay, finalmente, donación o préstamo. Algunas fórmulas suponen formas de aval o garantía a los prestatarios frente a los bancos –como ha hecho España a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial)– lo que puede hacer que, a la postre, los recursos desembolsados por la administración acaben siendo menores. También los procesos de fusión y absorción entre entidades pueden salvar a algunas de ellas, sin que sea necesario utilizar los recursos del contribuyente. La situación de excepcionalidad que estamos padeciendo puede aconsejar, así mismo, que los Bancos Centrales permitan a las entidades privadas una dilatación temporal en el proceso de ajuste de sus pérdidas. A medio plazo, los gobiernos tendrán que garantizar la solvencia de los supervivientes y, al mismo tiempo, que el estado recupera la mayor parte de su inversión.

En los últimos meses, bajo el supuesto de que ya no van a producirse nuevas quiebras de gran entidad, el esfuerzo de los líderes políticos internacionales se está orientando a lograr una mejora sensible en la gestión bancaria. Enumero algunas de las propuestas más debatidas:

- Evitar que exista una banca en la sombra –como ha sido en parte la banca de inversión norteamericana que no estaba sometida a un control serio de la Reserva Federal (el equivalente al Banco Central en USA) porque sus fondos no estaban públicamente asegurados– que pudiera funcionar sin presentar cuentas claras constantes de sus actividades. En adelante, se denominen como se denominen las entidades, siempre que operen como intermediarios financieros –es decir, manejando un dinero que no es suyo– van a tener que estar sometidos a una legislación clara y al control de la autoridad monetaria.
- Acabar con algunos productos o instrumentos financieros complejos de los que no sea posible calcular con claridad el riesgo que incorporan y el sustrato material sobre el que se definen. La innovación o la ingeniería financiera, que ha permitido construir castillos especulativos gracias al desconocimiento de la base real de las operaciones, va a tener que reducirse sensiblemente. También habrá que avanzar en la homologación de las operaciones que se permiten en países distintos, que se encuentran estrechamente interconectados por la globalización.
- Reformar las entidades supervisoras de los gobiernos para que puedan pedir más información a los agentes financieros y limitar sus actuaciones

conforme a las nuevas normas prudenciales que se discuten en estos meses. En la misma línea se estudia cómo modificar el funcionamiento de las agencias que evalúan el riesgo de estas operaciones, la forma de contabilizarlas en los balances de las empresas y el papel de unas auditoras rehenes de las firmas que valoran.

- Reformar el sistema de retribución de los directivos a fin de que tengan incentivos para buscar la solidez y rentabilidad a largo plazo de sus empresas y, no tanto, los beneficios extraordinarios y la revalorización bursátil. Una posibilidad consistiría en congelar sus retribuciones variables durante años hasta ver la evolución tendencial de las empresas. El G-20 no ha sido capaz de fijar un límite a los ingresos de los ejecutivos –que pueden ganar en un año 365 veces lo que sus empleados peor retribuidos¹⁰– pero, en Estados Unidos el gobierno ha recortado drásticamente los sueldos y primas de los gerentes de las empresas que han tenido que contar con ayudas públicas masivas.
- Los bancos van a ser obligados a “desapalancarse”, es decir, a reducir el volumen de operaciones que realizan en relación con sus recursos propios. Podrán prestar menos respecto al capital del que disponen y además tendrán que limitar el riesgo que pueden asumir con sus clientes. Las entidades deberán recapitalizarse, adquiriendo recursos frescos de los ahorradores, para poder proseguir su actividad. El mayor rigor contable puede dar lugar a la necesidad de crear un acuerdo Basilea III, después de ver el fracaso parcial de Basilea II¹¹.
- Así mismo, se estudia ampliar las provisiones por insolvencia, esto es, la parte de los beneficios que no se distribuye entre los accionistas para prevenir posibles impagos. Hasta ahora, los bancos tenían obligación de crear esas provisiones si algún cliente se declaraba moroso, lo que resulta coherente con el tratamiento del riesgo individual, pero que resulta inadecuado para prevenir un riesgo sistémico o de fase recesiva del ciclo económico (que, por definición, afectaría a muchos clientes a la vez) y que podría llevarse a cualquier entidad por delante¹².
- Para afrontar el riesgo sistémico la estrategia que se debate es doble: crear provisiones en las épocas de “vacas gordas” (cuando todo el

10 ESCOLAR, Ignacio: “Los siete pecados capitalistas”, *PÚBLICO* domingo 26 de octubre de 2008.

11 “Basilea I” y “Basilea II” son los acuerdos sucesivos sobre contabilidad y supervisión bancaria que, nacidos en el seno del Banco Internacional de Pagos de Basilea, rigen a escala internacional..

12 ALONSO, José Antonio, FERNÁNDEZ DE LIS, Santiago y STEINGBERG, Federico (coord): *La reforma de la arquitectura financiera internacional*, Empresa Global, Madrid, 2009.

mundo paga y los bancos tienen grandes ganancias), para poder afrontar con mayores garantías los periodos de “vacas flacas”, por una parte, y, por otra, relajar el requisito de mantener un nivel determinado de recursos propios en relación al volumen de las operaciones en estas últimas coyunturas, con el fin de evitar poner a las entidades en situación de quiebra técnica prematuramente.

En otro orden de cosas, la crisis también ha impulsado una reflexión sobre la necesidad de reformar el conjunto de instituciones financieras internacionales. La consolidación del G-20 –que representa el 85% del PIB mundial– como sustituto del G-8 refleja a la perfección no un aumento de la generosidad de los países ricos, sino su creciente dependencia de los “colosos del Sur” (China India, Brasil...). Ciertamente la globalización ha incrementado la interdependencia hasta el punto de que estos grandes países o los exportadores de la OPEP pueden adoptar comportamientos que comprometerían gravemente a las economías más poderosas de la OCDE y las posibilidades de conseguir una pronta recuperación de la economía mundial. Hasta ahora se ha aceptado la necesidad de que el FMI tenga muchos más recursos (se habla de doblarlos o triplicarlos) para apoyar a los países que atraviesen dificultades monetarias graves y que pueda ir adquiriendo rasgos de los que podría ser un Banco Central Mundial, otorgando un aumento del poder de los países en desarrollo de un 5%, que estos últimos consideran insuficiente. La posibilidad de que pueda emitir una verdadera divisa mundial, ajena a las monedas nacionales que conocemos, y que su actuación pase a guiarse por la necesidad de impulsar la actividad global no pasan de ser, hoy por hoy, propuestas académicas poco cercanas a la realidad. Así mismo, el compromiso de reducir el ámbito de actuación de los paraísos fiscales no dista de ser una afirmación voluntarista, dado que el sagrado principio de la soberanía nacional y la posibilidad de alterar la información contable, hacen difícil avanzar hacia este objetivo. Desde luego, la lucha contra los paraísos fiscales, la mayor democratización del FMI y su efectiva reorientación al desarrollo –de la que muchos gobiernos del Sur recelan profundamente, por las pasadas experiencias teóricas y prácticas– no dejarían de ser buenas noticias para el mundo. A la postre sólo se trataría de recuperar las ideas de Keynes para la economía mundial que quedaron desechadas en la conferencia de Bretton Woods celebrada en 1944.

Muchas de las medidas que hemos descrito se encuentran en fase de discusión y no sabemos hasta qué punto se llevarán a la práctica. No son pocos

La lucha contra los paraísos fiscales, la democratización del FMI y su reorientación al desarrollo, recuperando a Keynes, sería buena noticia para la economía mundial

los economistas que temen una “sobre-reacción” que conduzca a la creación de marcos normativos rígidos, tan exigentes en materia de seguridad, que recorten significativamente el crédito¹³. Otros, sin embargo, temen más bien que si pasa lo peor de la crisis no se lleven a cabo las reformas institucionales democratizadoras y antiespeculativas necesarias y que el sector financiero privado intente escapar lo más posible a la regulación pública. Esto no debiera ocurrir, teniendo en cuenta la perversa asimetría propia de las perturbaciones financieras: en las fases de auge, los que se benefician en mayor medida son unos pocos acomodados mientras que, en las fases de crisis, las consecuencias afectan a un número mucho mayor de personas con menor capacidad económica. Los beneficios sociales de una regulación rigurosa son incuestionables.

3. Propuestas para la reactivación económica mundial a corto plazo

Si dirigimos nuestra mirada al conjunto de la economía no financiera, observamos una caída de la actividad que, por su envergadura, sólo es comparable a la Gran Depresión de los años treinta del siglo XX¹⁴. La consecuencia, inevitable, ha sido un crecimiento del desempleo en todo el mundo que la OIT estimaba para 2009 en torno a los 65 millones de personas, al tiempo que la población que llega cada año al mercado laboral aumenta en 45 millones¹⁵. Desde el punto de vista del desarrollo humano, el incremento del desempleo y la reducción de los recursos destinados a la protección social, a la recuperación medioambiental o a la ayuda al desarrollo, constituyen –junto a la ampliación de la desigualdad– la auténtica factura de la crisis. Y los datos disponibles respecto a la evolución del abismo Norte-Sur no pueden ser más desalentadores. El Banco Mundial en agosto de 2008 elevó la estimación del número de personas que vivían con un dólar al día en 2005 de 990 millones a más de 1.400 millones¹⁶; la FAO advierte que, en los dos últimos años – como consecuencia conjunta de desastres naturales, el encarecimiento de los carburantes, la elevación del precio de los alimentos y la crisis financiera–, el

13 ARGIMÓN, Isabel y ROLDÁN, José María: “Políticas reactivas, medidas regulatorias y sistema bancario”, en ALONSO José Antonio, FERNÁNDEZ DE LIS, Santiago y STEINGBERG, Federico (coord): *La reforma de la arquitectura financiera internacional*, Empresa Global, Madrid, 2009.

14 DEHESA, Guillermo de la: *La primera gran crisis financiera del siglo XXI. Orígenes, detonantes, efectos, respuestas y remedios*, Alianza Editorial, Madrid, 2009

15 OIT: *Para recuperarse de la crisis. Un pacto mundial por el empleo* Ginebra 19 de junio de 2009.

16 RAVALLION, Martin y CHEN, Shaoua: BANCO MUNDIAL, agosto 2008.

número de hambrientos ha pasado de los 825 millones a los 1.020 millones; el V Foro Mundial del Agua convocado por las Naciones Unidas en marzo de este mismo año recordaba que más de 1.000 millones de personas carecen de agua potable y que su número va en aumento...

No sólo estamos asistiendo a una severa recesión en los países desarrollados. Las economías en desarrollo padecen, así mismo, las consecuencias de que los canales por los que se había producido el sensible crecimiento de los últimos años, se encuentren en estos momentos parcialmente taponados: el comercio mundial –a través del cual los fabricantes del Sur habían podido abastecer de productos baratos a las naciones ricas caerá entre un 9% y un 13% este año; los créditos e inversiones hacia los países en desarrollo se han reducido a la sexta parte en los últimos dos años pasando de 1,03 billones de dólares a unos 165.000 millones; las remesas que constituyen una fuente valiosísima de ingresos para decenas de los países más pobres del mundo han pasado de crecer a una tasa anual del 15% durante la última década a aumentar como mucho un 5% este año; y, por último, la ayuda al desarrollo, se encontraba estancada en unos 100.000 dólares y, aunque parece haber aumentado en 2008, se encuentra sometida, a un proceso de desnaturalización notable por incluir de manera creciente partidas de carácter dudoso (condonación de deuda externa, ayuda de emergencia, gastos en reconstrucción posbélica, becas, etcétera)¹⁷. Las perspectivas de financiación del desarrollo para los próximos años, enfrentados los gobiernos a la necesidad de contener el déficit y las corporaciones transnacionales a los procesos de ajuste internos, no son buenas¹⁸.

Los datos disponibles respecto a la evolución del abismo Norte-Sur no pueden ser más desalentadores

¿Qué estrategias están adoptando los responsables políticos para contribuir a la recuperación del dinamismo económico? Quizá lo primero que sería necesario recordar es lo obvio: en una economía de mercado los gobiernos no controlan los resortes de la producción, la inversión, el ahorro y el consumo que, en buena medida, son resultado de la libre decisión de los actores sociales. En consecuencia, las autoridades económicas pueden adoptar medidas –más o menos acertadas– que estimulen la iniciativa de los agentes sociales o faciliten un entorno favorable para su actuación, pero –en general– ni son los

17 SANHAUJA, José Antonio: "Desequilibrios globales: el impacto de la crisis en los países en desarrollo", *Crisis y cambio en la sociedad global. Anuario 2009-2010*. Fundación Cultura de Paz, Madrid, Icaria, Barcelona, 2009.

18 ALONSO, José Antonio: *Financiación del desarrollo. Viejos recursos, nuevas propuestas*. Siglo XXI, Madrid, 2009.

causantes exclusivos de las fases de auge, ni responsables únicos de las de recesión. El marco normativo e institucional de una economía así como la política económica son factores condicionantes, pero no determinantes, de la evolución económica general.

Una primera cuestión –a caballo entre el ámbito financiero y el del resto de la economía– ha consistido en intentar contrarrestar el recorte radical del crédito que ha estrangulado en el último año tanto la inversión de las empresas, como el consumo de bienes duraderos. El motivo de este novedoso fenómeno de “pánico financiero entre bancos” es que, dado el desconocimiento que las entidades bancarias tenían respecto a la salud real del resto, se produjo una desconfianza mutua que condujo a la parálisis del mercado interbancario –en el que se prestan mutuamente los bancos–, cuyo funcionamiento normal

Hay miles de autónomos y pequeñas empresas están en riesgo de quiebra debido a las deudas e impagos de las administraciones

resulta imprescindible para la marcha de la economía. Los resultados en este terreno han sido ambiguos, a pesar de que las autoridades monetarias han mantenido muy bajos los tipos de interés para facilitar liquidez a los bancos y sus clientes. Los gobiernos han criticado a los bancos que, tras haber recibido cuantiosos recursos públicos, no ampliaban el crédito a ciudadanos y empresas, pero éstos señalaban que pasaba bastante tiempo entre las declaraciones públicas de los políticos y la efectiva llegada de los fondos. Por otra parte, muchas entidades se han visto obligadas a emplear ese

dinero fresco en “arreglar las goteras” de sus propios balances y asegurar sus posiciones para evitar la quiebra, antes de conceder nuevos préstamos. En España ha resultado llamativo cómo las entidades financieras preferían pagar altos intereses a los ahorradores privados para capitalizarse, en lugar de acudir al mercado interbancario o a operaciones de salvamento (que socavaban, en cierta medida, su imagen pública y podían dar lugar a la desconfianza de sus depositantes). Todas estas prácticas podrían situarse dentro del marco de la política monetaria keynesiana y contarían con el aval conservador cuando el apoyo a la banca no diluyera su carácter privado. Mención especial merece –al menos en nuestro país– el ahogo y riesgo de quiebra que padecen miles de autónomos y pequeñas empresas, no sólo por la abrupta contracción del crédito, sino por las deudas e impagos de las administraciones públicas (locales, autonómicas y estatales) que se encuentran, a su vez, carentes de liquidez. Resulta inconcebible que el retraso de un día en el pago de impuestos desencadene la sanción inmediata y los atrasos en las obligaciones del estado de meses y años permanezcan impunes.

Un segundo ámbito de discusión se encuentra en el terreno del estímulo a la demanda efectiva. En puro keynesianismo, cuando se produce una recesión, el estado tiene que impulsar la demanda agregada (o total) de la economía,

gastando más de lo que ingresa y contrarrestando así la contracción del consumo y la inversión privados. Pero el modo de efectuar esta política y su intensidad, divide a socialdemócratas y conservadores. Los primeros –cuyas posiciones han sido relativamente dominantes en los últimos meses– sostienen la necesidad de impulsar las inversiones en infraestructuras y ampliar el gasto social. Los motivos son conocidos: ambas tienen una notable capacidad para crear empleo de modo casi inmediato y, además, otros efectos positivos. Las inversiones permiten mejorar la productividad a largo plazo de la economía, impulsan más intensamente el crecimiento que los gastos corrientes y ocupan al tipo de trabajadores más afectados por la crisis inmobiliaria (los obreros de la construcción). Por su parte, los gastos sociales, además de que son intensivos en mano de obra –por lo que generan mucho empleo en relación con los recursos utilizados– permiten mejorar las condiciones de vida de los sectores desfavorecidos, muchas veces duramente castigados por la crisis. Para los conservadores, sin embargo, el camino más adecuado para conseguir la reactivación consiste en reducir los impuestos (con lo que los consumidores tendrán más renta disponible para gastar y las empresas para invertir), reducir los costes de producción de las empresas, en particular los laborales (permitiendo más fácilmente el despido o reduciendo las cotizaciones a la seguridad social, por ejemplo). Así mismo, la austeridad en la administración y el control del déficit público (la diferencia entre los ingresos y los gastos del estado) forman parte de su filosofía.

En mi opinión, en momentos de crisis la posición socialdemócrata convencional resulta más consistente. En una fase recesiva no existen garantías de que la reducción de los impuestos se traduzca en mayor consumo privado (los trabajadores tienden a ahorrar en previsión de tiempos peores) o en inversión (las empresas difícilmente invertirán y crearán empleo si ven que no venden, aunque su carga impositiva disminuya) y es seguro que el estado puede gastar efectivamente todo lo que considere, porque la decisión es política. Otra cuestión a debatir es si administra los recursos del modo más eficiente y los canaliza hacia sus legítimos destinatarios, algo que será necesario exigir siempre. Por otra parte, una reducción significativa de los impuestos no resulta fácil de revertir a corto plazo por el coste político que conlleva y puede amenazar la financiación del Estado de Bienestar, uno de los mayores logros sociales del pasado siglo en los países desarrollados y que se enfrenta al desafío del creciente envejecimiento de la población. Mayor escepticismo genera la idea de que facilitar el despido generará más empleo cuando la producción actual no tiene salida. Lo que suele observarse en estas circunstancias es un aumento de los despidos y la sustitución de modalidades de trabajo de calidad (estabilidad y mejores sueldos) por otras formas precarias (peor pagadas y temporales). Este debate se produce, además, en una coyuntura en la que la recesión no se ha producido, en modo alguno, a causa de unas reivindicaciones

ciones laborales excesivas, sino en un contexto de muy moderado crecimiento de los salarios reales. Cuestión diferente es pensar cómo pueden encontrarse formas de reparto del trabajo existente de un modo socialmente justo. En nuestro país el temor de los sindicatos a que ciertas formas de trabajo a tiempo parcial o fórmulas análogas como los ajustes variables de la jornada a lo largo del año den lugar a un comportamiento empresarial sobreexplotador (presionar a los empleados para que hagan más en menos tiempo o se queden más allá de su horario formal) o a que se utilicen ciertas modalidades de contratación que tienen su sentido (becas, prácticas, relevos, etcétera) de modo abusivo o fuera de contexto, ha conducido a que nuestro mercado de trabajo sea poco capaz de ajustarse con flexibilidad y rapidez a las caídas abruptas del empleo.

En el plano de las políticas macroeconómicas también merecen una consideración detenida no sólo los niveles de imposición y gasto público, sino su composición. Parece claro que, si se quiere mantener el gasto social y extenderlo especialmente a las víctimas de la crisis –alargando la cobertura por desempleo, otorgando un alivio temporal a los ciudadanos más humildes que

No se ha aumentado la progresividad del impuesto sobre la renta que es quien mejor atiende a la capacidad del contribuyente

tienen hipotecada su residencia familiar y ven mermados sus ingresos, estableciendo una renta ciudadana mínima, etcétera– cuando los ingresos públicos tienden a caer y el déficit se dispara, es necesario tomar medidas tributarias costosas. En el corto plazo hay que aceptar que haya déficit porque, de evitarse, la falta de demanda –privada y pública– realimentaría la recesión. Mientras los agentes privados no encuentran posibilidad de obtener crédito por el racionamiento del mismo y por el endurecimiento de los requisitos exigidos a los potenciales prestatarios (los que piden un préstamo), los gobiernos –a los que se

considera siempre más solventes–, pueden obtener más crédito y más barato que el sector privado, tanto dentro del país como en los mercados internacionales, siempre que la magnitud de lo solicitado no sea disparatada. Pero, a medio plazo, será necesario elevar la presión fiscal y redefinir la estructura tributaria. Habida cuenta la diversidad de situaciones que acaecen a nivel internacional, querría ejemplificar el problema con el caso español.

El gobierno, sabiendo y asumiendo que el déficit de 2009 iba a ser muy elevado, se ha planteado que el de 2010 sea menor y propone varias medidas. La subida del IVA, presentada por unos como progresista y por otros como reaccionaria, implica que todos los ciudadanos participan en la financiación del gasto público –algo que puede ser calificado como moderadamente solidario– de forma independiente a la capacidad de pago –por tanto de modo regresivo–, ya que este impuesto indirecto no discrimina entre contribuyentes: el rico y el pobre pagan la misma cantidad por el mismo producto (si bien los pro-

ductos de primera necesidad –más importantes para los pobres– tienen un tipo reducido). La decisión de eliminar la bonificación de 400 euros que se había aprobado hace un par de años, sí resultaba francamente regresiva ya que –al ser un valor fijo y no una proporción– resultará relativamente más costosa para los más humildes. Sobre los ingresos totales, 400 euros representan una parte mucho mayor para las rentas bajas –por ejemplo las de los “mileuristas”– que para las medias o altas. La medida tendría un carácter más progresista si, finalmente, se mantuviera la deducción para las familiar con menores ingresos y se eliminara para el resto. Llama la atención que no se haya pensado aumentar la intensidad y progresividad del impuesto sobre la renta que es el que mejor toma en cuenta la capacidad del contribuyente y sus circunstancias personales¹⁹. También me parecería justo elevar temporalmente la tributación de los que trabajan para financiar la ampliación del seguro de desempleo o el reciclaje profesional de los que no pueden seguir haciéndolo. Sería una forma indirecta de repartir el trabajo y su fruto en épocas de escasez.

Por lo que se refiere al apoyo a las empresas, el abanico de medidas a utilizar es amplio. El gobierno ha optado por reducir el impuesto sobre beneficios a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas que mantengan el tamaño de sus plantillas. Me parece una medida acertada, dado que el grueso del empleo nacional se sitúa en este sector y la medida no incorpora aspectos arbitrarios de discriminación. Quienes crean y mantienen la mayor parte del empleo se verán beneficiados. Con todo, lo ideal es que ésta, como otras muchas medidas anticrisis, tenga un carácter temporal y se elimine cuando la economía se recupere. Las subvenciones a la compra de ciertos bienes –por ejemplo, un automóvil– me plantea más interrogantes técnicos y morales. ¿Por qué subvencionar la compra de unos productos y no de otros? ¿Por qué apoyar a unas empresas y sectores y no a los demás? ¿No es el coche un “símbolo central” del modelo consumista que tanto daño hace al medio ambiente? En todo caso, la ayuda a la compra, sin hacer distinciones entre unas u otras empresas, parece menos distorsionadora e injusta que el apoyo directo a alguna empresa particular. Esta última práctica –justificada teóricamente porque ciertos sectores productivos son estratégicos (generan mucho empleo, innovan, dinamizan ciertas regiones, crean empleo indirecto, son internacionalmente competitivas, etcétera)–, vulnera la competencia y, si se opta por defender “el producto nacional” frente al foráneo, se corre el peligro de contribuir a generar un proteccionismo generalizado que, hoy por hoy, no se ha producido. Imaginemos que los extranjeros deciden no venir a España de vacaciones, por ejemplo, o no comprar nuestros productos. Que los sindicatos defiendan hasta el final los puestos de trabajo es perfectamen-

¹⁹ Da que pensar el debate creado por la intención del gobierno de elevar los impuestos a los futbolistas.

te legítimo, que el estado de un trato de favor a algunas corporaciones para que no reduzcan o cierren sus fábricas es políticamente comprensible, pero también discutible tanto desde el punto de vista ético como desde el de la eficiencia económica. No obstante, justo es reconocer que la economía no es una realidad puramente mecánica y que las relaciones de poder juegan un papel central en su funcionamiento.

En definitiva, con mayor o menor fortuna –lo sabremos en los próximos meses, aunque algunos países como USA ya muestran signos de recuperación–, la mayor parte de los gobiernos del mundo –siguiendo una filosofía keynesiana y levemente socialdemócrata– han intentado llevar a cabo unas políticas fiscales expansivas para salir de la recesión, reforzadas por unas prácticas monetarias generosas basadas en el mantenimiento de tipos de interés muy bajos, la inyección de liquidez a los bancos y la dinamización del crédito avallando las operaciones de las entidades financieras o interviniendo directamente en los mercados. Salvar el empleo y proteger a los sectores más vulnerables constituían los objetivos centrales de las autoridades, aunque no tanto la búsqueda de una mayor equidad o la transformación del modelo productivo imperante.

4. Propuestas para fortalecer y mejorar la economía a largo plazo

Tras habernos referido a las medidas orientadas a sanear el sistema financiero y a la reactivación de la economía real, parece oportuno considerar –muy someramente– las transformaciones de corte más estructural que se están debatiendo en los foros políticos y académicos. Se trataría de aprovechar la presente crisis para reorientar el modelo de desarrollo vigente con el fin de hacerlo económicamente más eficiente, socialmente más inclusivo y más respetuoso con el medio ambiente.

En primer lugar, se oye hablar con frecuencia de invertir fondos públicos en una serie de campos prioritarios:

- La potenciación del “triángulo mágico” formado por la investigación, el desarrollo y la innovación (I&D+i).
- El desarrollo de energías renovables y nuevos métodos de ahorro en recursos naturales: tecnologías verdes.
- El cuidado y la recuperación del entorno natural en el contexto amenazante del cambio climático.
- El fortalecimiento de la educación en todos sus niveles: primaria, secundaria, profesional y universitaria.

- La renovación de las grandes infraestructuras del transporte y las comunicaciones, que en muchos países se han quedado obsoletas.
- La consolidación del Estado de Bienestar, ampliando los servicios públicos dirigidos a personas discapacitadas, colectivos en riesgo social, etcétera.
- El fortalecimiento, modernización e internacionalización del tejido empresarial para que pueda afrontar los nuevos desafíos de la globalización.

¿Qué cabe decir de estas y otras propuestas semejantes denominadas, en ocasiones, con la pomposa expresión “modificar el modelo productivo”? Creo que básicamente dos cosas. La primera es que, siendo estas actividades potencialmente positivas para impulsar la fortaleza de las economías nacionales y afrontar con garantías el desafío de la competitividad, así como para favorecer la cohesión social, requieren un esfuerzo financiero sostenido muy considerable, que parece difícil de alcanzar con el deterioro actual de las cuentas públicas. La segunda es que su efecto sobre el crecimiento económico sólo se hará sentir en décadas, esto es, en ningún caso tienen capacidad –por sí solas– de revitalizar, a corto plazo, la producción. Más aún, cuando el desempleo se dispara hacia valores muy altos y el entorno económico posee tintes recesivos, cualquier empeño por elevar intensamente la productividad de la economía (que se mide como la cantidad de producto obtenido por unidad de trabajo empleada) contribuye a que el paro aumente, ya que la utilización de técnicas más eficientes –sin que aumente fuertemente la demanda de bienes o servicios– convierte en innecesaria a una parte de la fuerza de trabajo. A corto plazo puede ser socialmente más beneficioso que el crecimiento no vaya acompañado de un aumento de la productividad. Por ejemplo, tomando en cuenta el número de personas que se incorporan cada año al mercado de trabajo y el efecto ordinario de destrucción del empleo derivado del avance tecnológico, en España hace falta que la economía crezca más de un 2% para que se cree empleo neto. Un crecimiento menor sería compatible con una elevación del paro.

La búsqueda de una mayor cohesión social –debilitada por el predominio del pensamiento neoliberal desde los años 80 y agravada seriamente por la crisis–, podría justificar una ampliación del Estado de Bienestar. De una parte, su fortalecimiento permitiría ampliar el empleo en sectores de alto beneficio colectivo; por otra, fomentar una mayor equidad en la distribución de la renta

Se trata de salir de la crisis con un nuevo modelo de desarrollo económicamente más eficiente y socialmente más inclusivo y ecológico

La protección de los grupos humanos más vulnerables y la creación de empleo, justifica la ampliación y fortalecimiento del Estado de Bienestar

y ampliar la protección a los grupos humanos más vulnerables resulta éticamente defendible cuando la crisis actual ha sido causada, fundamentalmente, por quienes tenían una posición económica privilegiada. En contra de esta pretensión se apuntan básicamente dos razones. La primera es económica: la factura de la crisis financiera y sus repercusiones ha llevado a los países a una situación de déficit que no deja margen de maniobra para una reforma fiscal progresiva. La segunda es de corte más ideológico: la expansión indiscriminada de las transferencias y prestaciones públicas, además de no ser económicamente viable a medio plazo, podría estimular un comportamiento de la población tendente a la dependencia y contrario a la iniciativa y el esfuerzo. No deja de ser cierto que la tentación del abuso, amenaza a cualquier tipo de política social y que la corrupción deslegitima la acción política. Desde posiciones más conservadoras la misma tendencia igualitaria es vista con recelo. «¿Qué es lo que impulsa a los grupos de presión poderosos y vociferantes a exigir mayor equidad?», preguntaba

Margaret Thatcher, entonces Primera Ministra de Gran Bretaña, en 1975. Su respuesta fue: “con frecuencia no se trata más que de una confusa combinación entre envidia y culpa burguesa”²⁰.

En otro terreno, la reforma de la arquitectura financiera internacional, sobre todo si fuera capaz de corregir parcialmente la asimetría que caracteriza las relaciones económicas Norte-Sur, sería enormemente deseable. Como ya se indicó en el apartado 2, algo se ha hecho en este ámbito, pero estamos a años luz de configurar un verdadero sistema institucional a escala mundial que democratice los organismos internacionales y consiga financiación suficiente para proveer los bienes públicos globales que tanto necesitamos. Casi todos los dirigentes políticos reconocen que el entramado institucional que surgió en la posguerra mundial resulta inadecuado para gobernar la economía global, pero la defensa de los intereses de cada país y el predominio absoluto del principio de soberanía nacional han impedido, hasta ahora, llevar a cabo las reformas necesarias que las últimas reuniones internacionales empiezan a reconocer.

La declaración final de la reciente cumbre del G-20 señala: “Queremos asegurarnos de que nuestro sistema regulador de bancos y otras instituciones financieras limita los excesos que llevaron a la crisis. No permitiremos una vuelta al comportamiento habitual en el sector bancario, allí donde la temeridad y la ausencia de responsabilidad condujeron a la crisis. Nos comprometemos

²⁰ Citado en PNUD: *Informe sobre el desarrollo humano 2005*, Mundi-Prensa, 2005 p. 57.

mos a actuar de manera conjunta para incrementar los niveles de capital (de las entidades), implementar exigentes estándares internacionales de remuneración para poner fin a las prácticas que auspiciaron un exceso de asunción de riesgos, mejorar los mercados de derivados no oficiales (OTC) y crear herramientas de gestión más potentes para responsabilizar a las grandes instituciones financieras de los riesgos en los que incurren. Los estándares de las grandes instituciones financieras internacionales debieran ser proporcionales al coste que supondría su quiebra. Para todas estas reformas nos hemos puesto unos calendarios de actuación precisos y exigentes. (...) Después de esta crisis, los actores críticos deben estar en la mesa y completamente integrados en nuestras instituciones para permitir que cooperemos para establecer unos cimientos que permitan un crecimiento vigoroso, equilibrado y sostenible. Designamos al G-20 como el foro principal de nuestra cooperación económica internacional. [En la pasada cumbre] establecimos el Consejo de Estabilidad Financiera para incluir las principales economías emergentes y dimos la bienvenida a sus esfuerzos para coordinar y evaluar el progreso en aras de fortalecer la regulación financiera. Estamos comprometidos (en el Fondo Monetario Internacional) a transferir como cuota a los mercados emergentes dinámicos y a países en desarrollo al menos un 5 por ciento, empleando la fórmula de asignación de cuotas actual como punto de partida con el que trabajar²¹.

¿Qué quedará de estas palabras? En mi opinión, todo depende de que los países desarrollados perciban que la falta de regulación de la economía global les puede perjudicar muy claramente también a ellos y que necesitan de verdad contar con los grandes países del Sur para salir adelante. Un peligro adicional se cierne sobre esta nueva situación: el posible olvido de los intereses del más de centenar de países no desarrollados que están ausentes del G-20 y que son menos necesarios al mundo rico. La evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo puede constituir un buen termómetro del panorama que se va a presentar en el futuro próximo. De entrada, resulta gratamente sorprendente constatar que 2008 –el año en que estalló la burbuja inmobiliaria– se produjo un gran incremento de la ayuda que alcanzó los 119.800 millones de dólares (un 12% más que el año anterior). Como señalan Iliana Olivie y Federico Steimberg, puede que la tendencia a buscar la salida de la crisis con una política expansiva opuesta al proteccionismo, la nueva visión de las relaciones exteriores del presidente Obama y el consenso que se va alcanzando en el G-20, produzcan un incremento de la solidaridad internacional, pero no podemos olvidar tampoco que el déficit público en los países de la OCDE oscilará

21 DECLARACIÓN DE LOS LIDERES: CUMBRE DE PITTSBURG, 25 de septiembre de 2009.

22 OLIVIE, Iliana y STEINBERG, Federico: "La ayuda sube en 2008 (sorprendentemente), pero ¿qué pasará en 2009?", *Real Instituto Elcano ARI 79/2009* – 22/05/2009.

entre el 5 y el 12% del PIB –lo que obligará a potenciar la austeridad presupuestaria en los próximos años– y que otras políticas como la migratoria, se están tornando ya mucho más restrictivas²².

En un plano más radical –aunque sin llegar a posturas antisistemas partidarias de eliminar la empresa privada– cabría plantear con más audacia aspectos como el impulso de la banca ética, la economía social, una mayor democracia económica en las grandes empresas, la promoción de una cultura de la austeridad o la defensa del decrecimiento. Hoy por hoy, no parece que se vaya a avanzar mucho en estos terrenos, más allá de las iniciativas de carácter experimental que llevan a cabo distintos movimientos sociales minoritarios. Su incidencia llegará, en el mejor de los casos, a medio plazo. La cuestión de la reducción de la jornada de trabajo (con la correspondiente disminución de los ingresos porque, en caso contrario, la pérdida de competitividad de las empresas podría ser fatal) o la creación de fórmulas más sensibles a la evolución del ciclo económico choca no sólo con la lógica empresarial y el recelo ya mencionado de las organizaciones sindicales, sino con la actitud mantenida por la mayor parte de los trabajadores que –si se encuentran empleados– no prefieren disponer de mayor ocio si es a costa de menores ingresos. El reparto de trabajo se enfrenta además a dos obstáculos objetivos. Por una parte, el exceso de fuerza de trabajo no está homogéneamente repartido: en unos sectores pueden sobrar empleados y faltar en otros (los trabajadores no son permutables en cualquier oficio). Pero, por otra, la disminución de las jornadas no puede plantearse del mismo modo a trabajadores muy bien remunerados y a aquellos que ocupan el nivel de salarios más bajos. Si el paro se concentra en estos últimos, el reparto del trabajo puede ser insostenible.

En definitiva, las reformas estructurales que se están discutiendo en la actualidad pretenden mejorar el funcionamiento de las instituciones conocidas y no llevar a cabo una transformación sistémica. Sus objetivos son más modestos, aunque en modo alguno despreciables: recuperar el crecimiento económico, estimular la creación de empleo, mejorar las condiciones de vida de los más pobres, reestructurar algo los organismos económicos internacionales y modificar el patrón productivo y de consumo para hacerlo menos dañino con el medio ambiente. Cabe incluso dudar de la capacidad y voluntad política de los líderes mundiales para impulsar estas reformas con la intensidad suficiente como para lograr una mejora significativa del bienestar a escala mundial.

5. Valoración final

¿Va a producirse una “refundación” del capitalismo o su sustitución por algún otro sistema económico? Guillermo de la Dehesa hace suya la impresión de Daniel Cohen, quien opina que “ni lo ocurrido representa el fin del capitalismo, como ahora argumentan algunos políticos y economistas de la izquierda, ni tampoco después de esta crisis el capitalismo financiero va a moralizarse solo, como opinan muchos de la derecha. Cita a Baruch Spinoza (1632-1677), holandés de origen sefardita español (Espinosa de los Monteros, Burgos) que escribía que “es mejor contar con las leyes que con la improbable evolución de la naturaleza humana para arreglar el destino de las naciones”. Esto significa que hay que cambiar muchas de las leyes financieras existentes para lograr que la gente vuelva a confiar en el mercado financiero, pero el curso del capitalismo contemporáneo no va a ser modificado por esta crisis financiera. Lo que sí va a cambiar es la euforia ideológica actual del *laissez-faire* y del menosprecio a la gente modesta y a los pobres y va a desplomarse el dogma del fundamentalismo del mercado, ya que quienes más lo han ejercido, ahora no se atreven ni siquiera a oponerse a la nacionalización temporal y forzada de muchos bancos que han quebrado por su culpa”²³.

El curso del capitalismo contemporáneo no va a ser modificado pero va a desplomarse el fundamentalismo del mercado libre

¿Se está recuperando ya la economía? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? No resulta fácil contestar a estas preguntas, sobre todo cuando un componente fundamental de la superación de la recesión depende, a su vez, de la confianza y mayor o menor optimismo de los inversores y empresarios. En cualquier caso, aunque parece que lo peor ha pasado a escala mundial, no olvidemos que los promedios en economía son engañosos: el mundo, cada continente, los distintos países, las regiones y los distintos grupos sociales “hablan de la feria según les va en ella”. Además, la recuperación de la actividad productiva no significa, en modo alguno, recuperación del empleo. Cuando mejora la coyuntura, las empresas comienzan por dar salida a los artículos acumulados, después intensifican el ritmo de trabajo –ralentizado durante la recesión–, posteriormente incrementan las horas extras, elevan los precios anteriormente deprimidos y, finalmente, amplían las plantillas. Por tanto, durante muchos años habrá que seguir pensando cómo repartir este bien

23 DEHESA, Guillermo de: *La primera gran crisis financiera del siglo XXI. Orígenes, detonantes, efectos, respuestas y remedios*, Alianza Editorial, Madrid, 2009, p.135.

escaso y los frutos del crecimiento. A medio plazo, la recuperación no puede consistir en "más de lo mismo". La modificación del patrón de producción y consumo, así como la creación de un "Estado de Bienestar mínimo" a escala planetaria, representan una exigencia ética, educativa y política que ha de nacer de la extensión una nueva sensibilidad. Como ha señalado Federico Mayor Zaragoza: "El mundo que dejemos a nuestro hijos dependerá de los hijos que dejemos a nuestro mundo".